

GUERRAS SUCIAS

EL MUNDO ES UN CAMPO DE BATALLA



JEREMY SCAHILL

DEL AUTOR DE *BLACKWATER*

Jeremy Scahill

Guerras sucias

El mundo es un campo de batalla

*Traducción de Iñigo García Ureta
y Albino Santos Mosquera*

 **PAIDÓS**
Barcelona • Buenos Aires • México

SUMARIO

<i>Nota para el lector</i>	23
<i>Prólogo</i>	25
1. «Preocupaba la posibilidad de que creáramos una lista oficial de personas que teníamos que liquidar».....	27
Washington (D.C.), 2001-2002	
2. Anwar Awlaki: una historia muy estadounidense.....	67
Estados Unidos y Yemen, 1971-2002	
3. Buscar, precisar, terminar: el auge del JSOC.....	85
Washington (D.C.), 1979-2001	
4. El jefe: Alí Abdalá Saleh.....	103
Yemen, 1970-2001; Washington (D.C.), 2001	
5. El enigma de Anwar Awlaki	111
Reino Unido, Estados Unidos y Yemen, 2002-2003	
6. «Este es un nuevo tipo de guerra»	119
Yibuti, Washington (D.C.) y Yemen, 2002	
7. Planes especiales	127
Washington (D.C.), 2002	
8. Supervivencia, evasión, resistencia, escape	133
Washington (D.C.), 2002-2003	
9. El alborotador: Stanley McChrystal.....	157
Estados Unidos, 1974-2003; Irak, 2003	
10. «Su intención y la nuestra es la misma».....	177
Somalia, 1993-2004	
11. «No tienes que demostrarle a nadie si hiciste lo correcto o no»	189
Irak, 2003-2005	

12 Sumario

12. «Sin sangre no hay delito»	203
Irak, 2003-2004	
13. La Estrella de la Muerte.....	223
Irak, 2004	
14. «La mejor tecnología, las mejores armas, el mejor personal... y dinero de sobra que quemar».....	231
Afganistán, Irak y Pakistán, 2003-2006	
15. «Mucho de todo aquello era de una legalidad cuestionable»..	249
Fuente: «Hunter»	
16. El encarcelamiento de Anwar Awlaki.....	255
Yemen, 2004-2007	
17. «En Estados Unidos saben mucho de guerras; son unos maestros de la guerra».....	261
Somalia, 2004-2006	
18. Fuga de prisión.....	287
Yemen, 2006	
19. Persecución en curso	293
Pakistán, 2006-2008	
20. «Todos los pasos dados por Estados Unidos beneficiaron a al-Shabab».....	299
Somalia, 2007-2009	
21. «Si su hijo no acude a nosotros, lo matarán los americanos»..	313
Yemen, 2007-2009	
22. «Obama está decidido a mantener el rumbo fijado por Bush»	329
Estados Unidos, 2002-2008	
23. Los <i>signature strikes</i> de Obama	335
Pakistán y Washington (D.C.), 2009	
24. Los de Operaciones Especiales «quieren ser los protagonistas de esta función como lo fueron en América Central en los ochenta»	343
Washington (D.C.) y Yemen, 2009	
25. «¿Suicidio o martirio?»	357
Yemen, 2009	
26. Obama hace buenas migas con el JSOC.....	361
Somalia, principios de 2009	

27. «Vamos a darle rienda suelta al JSOC».....	371
Arabia Saudí, Washington (D.C.) y Yemen, finales de 2009	
28. Samir Khan: un inverosímil soldado de infantería.....	381
Estados Unidos y Yemen, 2001-2009	
29. Un revés en Somalia	393
Somalia y Washington (D.C.), 2009	
30. «Si matan a niños inocentes y luego dicen que eran de al-Qaeda, entonces todos somos al-Qaeda».....	403
Washington (D.C.) y Yemen, 2009	
31. «Los estadounidenses realmente querían matar a Anwar»	417
Yemen, finales de 2009-principios de 2010	
32. «Señor Barack Obama..., confío en que recapacite sobre su orden de asesinar a... mi hijo»	431
Washington (D.C.) y Yemen, principios de 2010	
33. Una noche en Garnez	435
Washington (D.C.), 2008-2010	
34. El año del <i>drone</i>	461
Yemen y Estados Unidos, 2010	
35. Mandar a Anwar Awlaki al infierno.....	469
Yemen, 2010	
36. El servicio de citas de la CIA	479
Dinamarca y Yemen, 2010	
37. «La subasta del asesino»	483
Washington (D.C.), 2010	
38. «Aquí se viene a buscar el martirio, hermano»	493
Yemen, 2009-2010	
39. La persecución de Abdulelah Haider Shaye	501
Yemen, verano de 2010	
40. El presidente puede dictar sus propias reglas.....	507
Washington (D.C.) y Yemen, finales de 2010	
41. «Es probable que la penetración de al-Qaeda en Somalia haya contado con algo de ayuda»	517
Somalia, 2010	
42. «Anwar Awlaki... definitivamente tiene un misil en su futuro»	523
Yemen, 2011	

14 Sumario

43. El curioso caso de Raymond Davis. Primer acto.....	529
Pakistán, 2011	
44. El curioso caso de Raymond Davis. Segundo acto	543
Pakistán, 2011	
45. El fortín de Abbottabad.....	563
Washington (D.C.), 2010-2011; Pakistán, 2011	
46. «Lo tenemos, lo tenemos»	575
Pakistán, 2011	
47. «Ahora van a por mi hijo»	583
Somalia, Washington (D.C.) y Yemen, 2011	
48. «Estados Unidos ve a al-Qaeda como terrorismo, y nosotros opinamos que los <i>drones</i> son terrorismo».....	591
Yemen, finales de 2011	
49. La casa rosa.....	603
Washington (D.C.) y Somalia, 2011	
50. «Salvajismo total en todo el país»	625
Somalia, 2011	
51. Abdulrahman desaparece	635
Yemen, 2011	
52. Hellfire.....	639
Washington (D.C.) y Yemen, 2011	
53. Pagar por los pecados del padre.....	649
Washington (D.C.) y Yemen, 2011	
<i>Epílogo. La guerra perpetua</i>	655
<i>Agradecimientos</i>	665
<i>Acrónimos y abreviaturas</i>	673
<i>Notas</i>	677
<i>Índice analítico y de nombres</i>	807

Capítulo 1

«PREOCUPABA LA POSIBILIDAD DE QUE CREÁRAMOS UNA LISTA OFICIAL DE PERSONAS QUE TENÍAMOS QUE LIQUIDAR»

Washington (D.C.), 2001-2002. Eran las diez y diez de la mañana del 11 de junio de 2002, nueve meses después de los atentados del 11 de septiembre. Un grupo de congresistas (senadores y representantes) entró en la sala S-407 del Capitolio federal. Todos ellos eran miembros de un reducido comité de élite en Washington que tenía confiados (por ley) los secretos más celosamente guardados del Gobierno estadounidense en materia de seguridad nacional. «Propongo que esta reunión del comité sea cerrada al público —declaró el republicano Richard Shelby (el más veterano de los dos senadores por Alabama) con su acento sureño característico— porque la seguridad nacional de Estados Unidos podría verse comprometida si se divulgara algo de lo que aquí se comente.» Su moción fue secundada de inmediato y dio así comienzo aquella sesión secreta.¹

Al mismo tiempo que los miembros del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia y los del comité homónimo permanente de la Cámara de Representantes se reunían en Washington (D.C.), a medio mundo de distancia, en Afganistán, los líderes tribales y políticos del país convocaban una *loya yirga*, un «gran consejo», con la misión de decidir quién dirigiría el país tras el rápido derrocamiento del Gobierno talibán a manos de las fuerzas armadas estadounidenses.² Tras el 11-S, el Congreso norteamericano había concedido a la administración Bush amplios poderes para perseguir a los responsables de los atentados. El Gobierno talibán, que gobernaba en Afganistán desde 1996, fue aplastado por la intervención militar norteamericana, que, de ese modo, privó a al-Qaeda del refugio del que gozaba en suelo afgano. Osama bin Laden y otros líderes de al-Qaeda se dieron a la fuga, pero la administración Bush preveía una guerra larga y esta no había hecho más que empezar.

En la Casa Blanca, el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, andaban ya muy ocupados planificando la siguiente invasión: la de Irak. Cuando accedieron al poder, entre sus planes se encontraba ya el derrocamiento de Sadam Husein y, pese a que no existía conexión iraquí alguna con los atentados, aprovecharon el 11-S

como pretexto para impulsar sus propias prioridades. Pero las decisiones tomadas en aquel primer año de la administración Bush iban mucho más allá de Irak, Afganistán o, incluso, al-Qaeda. Los hombres que estaban al frente del ejecutivo federal en aquel momento estaban empeñados en cambiar la manera en que Estados Unidos libraba sus guerras y, de paso, en dotar a la Casa Blanca de un nivel de competencias sin precedentes. Se habían terminado los tiempos de las batallas contra enemigos uniformados y ejércitos nacionales con arreglo a las normas de las Convenciones de Ginebra. «El mundo es un campo de batalla» se convirtió en un lema reiterado por los conservadores del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos en multitud de diapositivas de PowerPoint en las que exponían sus planes de guerra global general y sin fronteras. Y los terroristas no eran su único objetivo. El sistema democrático de equilibrios y contrapesos entre los diversos poderes, con más de doscientos años de historia, estaba también en el punto de mira de los máximos dirigentes estadounidenses.

La sala S-407 se encuentra enclavada en el ático del edificio del Capitolio. Carece de ventanas y solamente es accesible a través de un ascensor... o de una estrecha escalera. La sala estaba clasificada ya entonces como instalación segura y había sido equipada con sofisticado material de contraespionaje destinado a bloquear cualquier intento de escucha o seguimiento no autorizado desde el exterior. Durante décadas, aquel espacio había albergado sesiones informativas dedicadas a temas de suma confidencialidad, presentadas ante miembros selectos del Congreso por la CIA, el ejército u otras figuras y entidades que habitan en las sombras de la política federal estadounidense. En esa sala se informaba a los congresistas de las acciones encubiertas ordenadas por el ejecutivo. Era una de las diversas instalaciones de este estilo existentes en Estados Unidos donde se comentaban los secretos más celosamente guardados de la nación.³

Los senadores y los representantes que se sentaron en aquella sesión a puerta cerrada de aquella mañana de julio de 2002 en el Capitolio iban a oír el relato de cómo Estados Unidos había cruzado un umbral no traspasado hasta entonces. La finalidad expresa de la reunión era revisar el funcionamiento y la estructura de las organizaciones antiterroristas federales con anterioridad al 11-S. En aquel entonces, había un nivel sustancial de acusaciones y reproches cruzados a propósito de los presuntos «fallos» de los servicios de inteligencia estadounidenses que habían dado pie a que se produjeran los atentados. Inmediatamente después de los que habían sido los golpes terroristas más devastadores en suelo norteamericano de toda la historia, Cheney y Rumsfeld acusaron a la anterior admi-

nistración Clinton de no haber sabido reconocer la urgencia de la amenaza de al-Qaeda y de haber legado a Bush, el nuevo presidente, un territorio estadounidense vulnerable. Los demócratas contraatacaron poniendo el énfasis en su propio historial de lucha contra al-Qaeda en la década de los noventa. Con su comparecencia ante los legisladores estadounidenses en aquella jornada en concreto, Richard Clarke pretendía enviar un mensaje muy claro a la élite del Congreso federal. Clarke había sido el zar del antiterrorismo del presidente Bill Clinton y había presidido el Grupo de Seguridad Antiterrorista del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) durante la década previa al 11-S. También había trabajado en el Consejo de Seguridad Nacional en tiempos del presidente George H. W. Bush y había sido secretario de Estado adjunto en la administración del presidente Ronald Reagan. Era, pues, uno de las autoridades más experimentadas de Estados Unidos en materia de antiterrorismo y, en el momento de la celebración de aquella sesión, estaba a punto de dejar de desempeñar función alguna en el ejecutivo federal, aunque aún ejercía como asesor especial del presidente George W. Bush sobre seguridad en el ciberespacio.⁴ Clarke era considerado un «halcón» que había adquirido prominencia al amparo de la administración demócrata y del que se sabía que había presionado intensamente cuando Clinton era presidente para que se ampliara el volumen y el alcance de las operaciones encubiertas.⁵ Así que era lógico desde el punto de vista táctico que la administración Bush lo hubiera propuesto para defender la instauración de un nuevo régimen de tácticas militares y de inteligencia, una alternativa que, hasta aquel momento, había sido descartada por ilegal, antidemocrática o, sencillamente, peligrosa.

Clarke explicó que los debates internos en la comunidad de organismos federales encargados de la seguridad nacional en tiempos de Clinton habían estado marcados por la preocupación por no infringir la prolongada prohibición presidencial del asesinato como método de actuación gubernamental y por un profundo temor a repetir escándalos del pasado. Clarke dijo estar convencido de que, en la CIA, se había desarrollado «una cultura» que hacía que la Agencia rehuyera las «operaciones encubiertas a gran escala» por considerar que estas siempre «se complicaban y se descontrolaban, y finalmente terminaban por salpicar y enfangar a la propia organización».⁶

«La historia de las operaciones encubiertas durante los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo xx no se puede calificar de afortunada que digamos», confesó Clarke a los legisladores allí reunidos. La CIA había orquestado el derrocamiento de Gobiernos populistas en América Latina y Oriente Próximo, había apoyado a los escuadrones de la muerte de

América Central, había facilitado el asesinato del líder rebelde Patrice Lumumba en el Congo y había ayudado a mantener en el poder a diversas juntas y dictaduras militares. El torrente de asesinatos se había descontrolado hasta tal punto que, en 1976, un presidente republicano, Gerald Ford, creyó necesario decretar la Orden Ejecutiva 11905, que prohibía explícitamente que Estados Unidos cometiera «asesinatos políticos».⁷ Los agentes de la CIA que habían madurado a la sombra de aquella era y habían ascendido a puestos de autoridad en la agencia durante la década de los noventa «habían institucionalizado», según Clarke, la idea de que «las acciones encubiertas son demasiado arriesgadas y tienen muchas probabilidades de explotar en las manos de quienes las ejecutan. Y luego ninguno de los sabelotodos de la Casa Blanca que presionaron en su momento para que se realizaran tales acciones encubiertas va a dar la cara cuando [el Comité del Senado sobre Inteligencia] convoque al jefe operativo de turno para que explique el desastre que dejó tras de sí la acción en cuestión».

El presidente Jimmy Carter introdujo una enmienda en la prohibición de asesinatos que dictara su antecesor para hacerla más general todavía. Eliminó las palabras que limitaban la prohibición a los asesinatos políticos y la hizo extensiva, además, a la participación de actuantes por delegación o contrato del Gobierno estadounidense en toda clase de asesinatos. «Ninguna persona empleada por (o que actúe en nombre de) el Gobierno de Estados Unidos participará (o conspirará para participar) en un asesinato», rezaba la orden ejecutiva del presidente Carter.⁸ Aunque los presidentes Reagan y George H. W. Bush conservaron tal cual la redacción de ese decreto, ninguna orden ejecutiva de ningún presidente llegó a definir en realidad qué se entendía por asesinato conforme a los términos de aquella prohibición. De hecho, Reagan, Bush y Clinton desarrollaron sus propias vías para esquivar la prohibición. Reagan, por ejemplo, autorizó un ataque aéreo contra la residencia del dictador libio Muamar el-Gadafi en 1986 en represalia por su supuesta implicación en un atentado con explosivos contra una discoteca de Berlín.⁹ Bush padre autorizó ataques parecidos contra los palacios de Sadam Husein durante la guerra del Golfo de 1991.¹⁰ Y Clinton hizo lo propio durante la Operación Zorro del Desierto en 1998.¹¹

Clarke refirió a los congresistas detalles sobre los planes que se elaboraron durante la administración Clinton para matar y capturar a líderes de al-Qaeda y de otras organizaciones terroristas, entre ellos, a Osama bin Laden. El presidente Clinton aseguró entonces que la prohibición no era aplicable a casos de terroristas extranjeros implicados en tramas de aten-

tados contra Estados Unidos. A raíz de las explosiones en las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania de finales de 1998, Clinton autorizó una serie de ataques con misiles de crucero contra presuntos campos de entrenamiento de al-Qaeda en Afganistán, así como contra una instalación industrial de Sudán a la que la administración norteamericana atribuyó la función de supuesta planta productora de armas químicas.¹² Posteriormente, se demostró que, en realidad, era una fábrica de medicamentos.¹³ Aunque es cierto que Clinton otorgó esa autorización del uso de la «fuerza letal» a los militares estadounidenses, no lo es menos que fue desde el convencimiento de que esta sería usada solo de manera excepcional y a instancias directas del presidente, tras estudiar caso por caso.¹⁴ Lejos de conceder carta blanca para la realización de esas operaciones, la Casa Blanca de Clinton exigió un examen exhaustivo de cada propuesta de acción de ese tipo. También estableció una serie de estructuras jurídico-legales. El presidente firmó, por ejemplo, autorizaciones para misiones letales de búsqueda (*lethal findings*) que permitían que los agentes y efectivos del Gobierno estadounidense encargados de la búsqueda y localización de terroristas a lo largo y ancho del planeta se emplearan con niveles mortales de fuerza. Aun así, según Clarke, rara vez llegaron a apretar realmente el gatillo.¹⁵

Clarke admitió que las autorizaciones de asesinatos selectivos emitidas durante la era Clinton «se asemejaban a una serie característicamente talmúdica y un tanto estrambótica de documentos», y añadió que fueron confeccionadas poniendo especial atención en limitar el alcance de esa clase de operaciones. «La administración y, en especial, el Departamento de Justicia no querían invalidar por completo la prohibición del asesinato. De ahí que insistieran en limitar la expansión de esas autorizaciones.» Añadió que aquellas licencias de asesinatos selectivos emitidas durante la era Clinton eran «una especie de tratamientos con un espectro de actuación muy limitado. Pero creo que eso se debía a un empeño en no acabar por completo con la prohibición de los asesinatos, es decir, en no convertir al Gobierno estadounidense en una mafia de matones con una lista de objetivos humanos que había que liquidar».

La representante Nancy Pelosi, una de los congresistas demócratas más poderosos de aquel entonces, recordó a sus colegas presentes en aquella dependencia a puerta cerrada que no podían comentar en público ninguno de los memorandos ultrasecretos que autorizaban el uso de una fuerza letal. La notificación de aquellos memorandos, dijo ella, «está reservada únicamente al máximo nivel de seguridad en el Congreso. Es un hecho extraordinario [...] que esta información esté siendo compartida

hoy aquí con nosotros». Advirtió que no podía producirse filtración alguna hacia los medios de comunicación y añadió: «En modo alguno podemos confirmar, negar, estipular ni admitir conocimiento de los memorandos». ¹⁶ Alguien preguntó a Clarke si creía que Estados Unidos debía levantar la prohibición del asesinato como método operativo que regía en aquel momento. «Creo que hay que ser muy cuidadosos al respecto de la amplitud con la que se autoriza el uso de la fuerza letal —respondió—. No creo que la experiencia israelí de contar con una dilatada lista de objetivos para eliminar haya sido muy exitosa que digamos. No lo ha sido; desde luego, no han conseguido frenar los actos ni las organizaciones terroristas allí donde han asesinado a personas.» Clarke dijo entonces que, cuando él y sus colegas en la administración Clinton habían emitido autorizaciones para operaciones de asesinato selectivo, estas habían sido para ser aplicadas en casos muy excepcionales y de un carácter netamente quirúrgico. «No queríamos crear un amplio precedente que permitiera que, posteriormente, las autoridades de inteligencia contaran con listas de personas que había que asesinar y que sus efectivos se dedicaran rutinariamente a actividades más o menos próximas al asesinato. [...] Tanto en el Departamento de Justicia como entre ciertos elementos de la Casa Blanca y de la CIA preocupaba la posibilidad de que creáramos una lista oficial de personas que se tenían que liquidar y que se convirtiera a partir de ese momento en algo así como un elemento institucionalizado en el que pudiéramos seguir inscribiendo nombres y para el que contáramos con una especie de equipos de matones dedicados a ir en busca de personas para asesinarlas.»

Aun así, Clarke formaba parte de un reducido grupo de altos funcionarios federales del antiterrorismo estadounidense que, durante la administración Clinton, habían hecho campaña a favor de una mayor agresividad de la CIA en el uso de las mencionadas autorizaciones letales y que habían estirado los límites de la prohibición del asesinato como método hasta las cotas que él mismo estaba describiendo en aquella reunión. «A partir del 11-S —declaró Clarke a los allí presentes—, hemos empezado a hacer casi todo lo que nosotros proponíamos ya antes de esa fecha.»

Pronto empezaría a hacerse eso y más.

Rumsfeld y Cheney habían ocupado los cargos de la nueva administración presidencial con destacados neoconservadores que habían pasado la era Clinton trabajando en lo que, en la práctica, constituía un verdadero Gobierno en la sombra: colaborando en laboratorios de ideas de derecha

y en importantes empresas contratistas del sector de la defensa y los servicios de inteligencia, tramando su regreso al poder. Entre ellos se encontraban Paul Wolfowitz, Douglas Feith, David Addington, Stephen Cambone, Lewis «Scooter» Libby, John Bolton y Elliott Abrams. Muchos de ellos se habían curtido en la Casa Blanca de Reagan y de Bush padre. Algunos —como Cheney y Rumsfeld— provenían ya de la era Nixon. Varios fueron artífices de un programa político nacido al amparo de la organización ultranacionalista Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC, según sus siglas en inglés).¹⁷ Pese a las decisiones de Clinton de usar la fuerza en Yugoslavia e Irak y de ordenar ataques aéreos contra otros países, la administración del anterior presidente era para aquellos neoconservadores una fuerza poco menos que pacifista que había debilitado la mano firme del dominio estadounidense y había dejado a la nación en una situación de elevada vulnerabilidad. Creían que los años noventa habían sido una «década de abandono de la defensa».¹⁸ Llevaban tiempo defendiendo que, tras el final de la Guerra Fría, Estados Unidos era la única superpotencia y que, como tal, debía emplearse agresivamente en todo el mundo, redibujando los mapas y expandiendo su imperio. En su proyecto ocupaba un lugar fundamental el incremento radical del gasto militar norteamericano, algo para lo que Cheney y sus asesores ya habían elaborado detallados planes en 1992, cuando aquel era secretario de Defensa. El borrador de la Guía de Planificación de la Defensa redactado por el equipo de Cheney proporcionaba —según afirmaban los *neocons* en el documento fundacional del PNAC— «una hoja de ruta idónea para el mantenimiento de la preeminencia estadounidense, pues impedía el ascenso de una gran potencia rival y conformaba un orden de la seguridad internacional en perfecta sintonía con los principios y los intereses norteamericanos».¹⁹ Wolfowitz y Libby fueron los autores clave del programa de defensa de Cheney,²⁰ en el que se defendía que Estados Unidos debía ser la única superpotencia en solitario y debía emprender todas las medidas necesarias para disuadir a sus «competidores potenciales de aspirar siquiera a desempeñar un papel regional o global mayor por su cuenta».²¹

El plan de aquellos hombres fue desechado, sin embargo, por otras figuras más poderosas de la administración del propio Bush padre, como eran el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Colin Powell, el secretario de Estado, James Baker, y el consejero de seguridad nacional, Brent Scowcroft. En el redactado final del documento terminaría rebajándose considerablemente el lenguaje imperialista del borrador inicial (para gran frustración de Cheney y de los neoconservadores).²²

Transcurrida una década desde entonces, antes incluso del 11-S, los neoconservadores (restablecidos en el poder por la administración de Bush hijo) rescataron aquellos planes de la papelera a la que habían sido arrojados en su momento y se propusieron ponerlos en práctica. Para ello, iba a ser esencial expandir la proyección de la fuerza estadounidense, al igual que crear y formar unidades mejoradas de operaciones especiales de élite. Tal y como había declarado George W. Bush en un discurso de campaña en 1999 redactado por Wolfowitz y otros *neocons*: «En el siglo venidero, nuestras fuerzas deberán ser ágiles, letales, fáciles de desplegar y sostenibles con el mínimo apoyo logístico. Debemos tener capacidad para proyectar nuestro poder a muy largas distancias, en unas pocas semanas o días, y no en meses. Por tierra, nuestras fuerzas pesadas deben ser más ligeras. Y nuestras fuerzas ligeras deben ser más letales. Todas ellas deberán ser más fáciles de desplegar».²³

Los neoconservadores también contemplaban como proyecto de futuro la afirmación del dominio estadounidense sobre los recursos naturales a escala global, aunque fuera en confrontación directa con aquellos Estados-nación que se interpusieran en el camino hacia tal propósito. Preveían activamente la posibilidad de cambios de régimen en múltiples países, entre los que destacaba el de Irak por su riqueza petrolífera. «Pese a ser partidarios acérrimos de la intervención militar estadounidense, lo cierto es que pocos *neocons* han servido en realidad en las fuerzas armadas, y aún menor es el número de los que han sido elegidos alguna vez en votación popular para desempeñar un cargo público», escribió Jim Lobe, periodista que había seguido de cerca la ascensión del movimiento neoconservador durante toda una década hasta el 11-S.²⁴ Según él, los *neocons* se caracterizaban por una «incesante ansia de dominio militar global y por el desprecio a las Naciones Unidas y al multilateralismo en general». Lobe añadió: «A juicio de los neoconservadores, Estados Unidos es una fuerza de bien en el mundo; tiene, por lo tanto, la responsabilidad moral de ejercer tal fuerza; su poderío militar debería ser el dominante; debería actuar a escala global, sin que los compromisos multilaterales le impidieran intervenir unilateralmente en pos de sus propios intereses y valores; y debería mantener una alianza estratégica con Israel. Sadam debe marcharse, sostienen ellos, porque es una amenaza para Israel (y también para Arabia Saudí) y porque ha hecho acopio —y uso— de abundantes armas de destrucción masiva». La gente del PNAC había llegado a la conclusión de que «Estados Unidos lleva décadas intentando desempeñar un papel más permanente en la seguridad regional del Golfo. Aunque el conflicto irresuelto con Irak supone la justificación más

inmediata, la necesidad de una presencia sustancial de fuerzas norteamericanas en el Golfo trasciende la cuestión del régimen de Sadam Husein». ²⁵ A las pocas semanas de asumir sus cargos, Rumsfeld y Cheney presionaron para que se diera marcha atrás en la firma del Estatuto de Roma efectuada por el presidente Clinton (en el ultimísimo momento de su mandato), por la que Estados Unidos reconocía la legitimidad de un tribunal penal internacional. No iban a tolerar que las fuerzas estadounidenses estuvieran sujetas a un potencial procesamiento judicial por sus actuaciones en el resto del mundo. Poco después de convertirse en secretario de Defensa, Rumsfeld escribió que quería que su departamento jurídico —y los de otros organismos del Gobierno federal— hallaran inmediatamente «una vía para salir de ese tratado y para anular la firma de Clinton». ²⁶

Hasta las viejas glorias de la política exterior estadounidense adscritas a las filas republicanas consideraban que los nuevos responsables de la misma eran poco menos que un puñado de extremistas. «Cuando vimos a toda esa gente de vuelta en la capital, todos los que estábamos por allí entonces dijimos: “¡Oh, por Dios, han vuelto los chiflados!”». “Los chiflados”, así nos referíamos a aquellas personas», recordaba Ray McGovern, quien trabajara durante veintisiete años en la CIA y fuera asesor de seguridad nacional de George H. W. Bush cuando este era vicepresidente, tras haber estado a sus órdenes cuando Bush fue director de la Agencia a finales de los años setenta. ²⁷ McGovern dijo que, nada más llegar al poder, los neoconservadores resucitaron ideas que los líderes republicanos veteranos del ámbito de la política exterior habían arrojado a la papelera en anteriores administraciones de presidentes de su partido; también añadió que aquellas ideas extremistas no tardarían en «resurgir de sus cenizas para ser puestas en práctica». Según McGovern, las nuevas autoridades de la política exterior estadounidense creían que «si tenemos mucho poder por desplegar, hay que desplegarlo. Debemos reafirmar nuestra presencia en zonas críticas, como Oriente Próximo y Medio».

Cheney y Rumsfeld llevaban décadas siendo líderes fundamentales de un movimiento muy combativo que, durante años, había sido externo al Gobierno de Washington, pero que, en tiempos de administraciones republicanas, había conseguido actuar desde dentro de la propia Casa Blanca. Su misión consistía en conferir al poder ejecutivo del Gobierno federal poderes sin precedentes para librar guerras secretas, llevar a cabo operaciones encubiertas sin supervisión externa y espiar a los propios ciudadanos estadounidenses. En su opinión, el Congreso no tenía derecho a supervisar tales operaciones y debía limitarse simplemente a financiar las

agencias y los organismos encargados de ejecutarlas. Para ellos, la presidencia tenía que actuar como una especie de dictadura en materia de seguridad nacional que, como tal, solo debía responder ante su propia concepción de lo que era mejor para el país. Ambos hombres trabajaron juntos por primera vez en 1969, en la Casa Blanca de Nixon, cuando Rumsfeld contrató a Cheney (entonces un estudiante de doctorado) como asesor suyo en la Oficina de Oportunidades Económicas.²⁸ Aquello fue el pistoletazo de salida para una carrera que mantendría desde entonces a Cheney en los despachos del poder de la élite republicana y para un proyecto de toda una vida dirigido a incrementar las competencias del ejecutivo federal. El escándalo sacudió repetidamente la Casa Blanca de Nixon en los primeros años setenta, cuando se supo que Estados Unidos había bombardeado en secreto zonas situadas en territorio de Laos y Camboya, que el presidente y sus asesores manejaban una lista de «enemigos» internos (nacionales), y que Nixon había ordenado el tristemente famoso allanamiento de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, ubicada en el hotel Watergate; el Congreso estadounidense comenzó entonces a atacar los privilegios del ejecutivo y el extremo secretismo que se había apoderado de la administración. El legislativo federal condenó los bombardeos de Laos y Camboya²⁹ y superó el intento de veto de Nixon contra la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limitaba las competencias del presidente para autorizar acciones militares.³⁰ En concreto, aquella norma estipulaba la obligación del jefe de Estado de «consultar con el Congreso antes de introducir a las fuerzas armadas de Estados Unidos en hostilidades o en situaciones donde la implicación inmediata en hostilidades sea fácilmente deducible de las circunstancias imperantes».³¹ De no existir una declaración formal de guerra, si se producía una acción militar, el presidente estaba obligado a partir de entonces a informar por escrito al Congreso —en un plazo máximo de 48 horas— de «las circunstancias que hayan hecho recomendable la implicación de las fuerzas armadas estadounidenses, la autoridad constitucional y legislativa por la que se haya autorizado tal implicación, y el alcance y la duración estimada de las hostilidades o de la mencionada implicación». Cheney entendía que la Ley de Poderes de Guerra era inconstitucional, pues suponía una invasión de las atribuciones del presidente en su calidad de comandante en jefe. Llegó a describir aquella época como el momento en que la autoridad presidencial estadounidense «tocó fondo».³²

Después de que el escándalo del Watergate forzara la dimisión de Nixon, Cheney pasó a ejercer como jefe de gabinete del presidente Ford y Rumsfeld se convirtió en el secretario de Defensa más joven de la histo-

ría de Estados Unidos. En 1975, el Congreso redobló sus iniciativas de investigación del submundo de las operaciones secretas de la Casa Blanca gracias a las labores de la Comisión Church, presidida por Frank Church, senador demócrata por Idaho. La comisión investigó una amplia serie de abusos cometidos por el poder ejecutivo en años anteriores, entre los que se incluían operaciones de espionaje en suelo estadounidense contra ciudadanos del propio país.³³ La investigación de la Comisión Church dibujó un panorama de actividades ilegales y secretas llevadas a cabo sin supervisión alguna de los tribunales de justicia ni del Congreso. También indagó en la implicación de Estados Unidos en el derrocamiento y la muerte del presidente democrático de Chile, el socialista Salvador Allende, en 1973,³⁴ si bien, en este caso, Ford invocó su «privilegio ejecutivo» y frustró el escrutinio.³⁵ Durante las pesquisas de la Comisión Church, Cheney trató de forzar la apertura de diligencias del FBI contra el afamado periodista de investigación Seymour Hersh para conseguir una acusación formal contra él y contra el *New York Times* por espionaje en represalia por las revelaciones del propio Hersh a propósito del espionaje ilegal de la CIA en territorio norteamericano a diversos conciudadanos. Pretendía así asustar a otros periodistas para que no se atrevieran a exponer públicamente otras acciones secretas controvertidas de la Casa Blanca.

El FBI rechazó las solicitudes de Cheney relativas a Hersh.³⁶ El resultado final de la investigación de la Comisión fue uno de los peores imaginables para Cheney y para su movimiento de potenciación del poder ejecutivo: sus conclusiones llevaron a la creación de comités del Congreso que tenían encomendada por ley la supervisión de las operaciones de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, incluidas las de carácter secreto.³⁷ En 1980, el Congreso aprobó una ley que requería a la Casa Blanca informar de todos sus programas de espionaje a esos recién creados comités sobre inteligencia.³⁸ Cheney (y Rumsfeld) pasarían luego buena parte de sus respectivas carreras tratando de dar al traste con esas competencias asumidas por el legislativo federal.

Antes incluso del final de la «progresista» administración de Carter, Cheney había llegado ya a la conclusión de que los poderes de la presidencia habían quedado «gravemente debilitados».³⁹ Durante los años de la administración Reagan, Cheney ejerció de congresista por Wyoming. En la Cámara de Representantes se reveló como un partidario acérrimo de la campaña de Reagan por el «reapoderamiento» de la Casa Blanca. El premio Pulitzer Charlie Savage escribió en su libro *Takeover: The Return of the Imperial Presidency and the Subversion of American Democracy* que el Departamento de Justicia de la era Reagan se propuso poner fin al «resur-

gimiento del Congreso iniciado en la década de los años setenta» y encargó un informe que recomendaba que la Casa Blanca hiciera caso omiso de las leyes que «invadían inconstitucionalmente el terreno del poder ejecutivo»⁴⁰ y que las reinterpretara recurriendo al mecanismo de los *signing statements*, es decir, los pronunciamientos con los que el presidente puede acompañar su firma de refrendo de una ley aprobada en el Congreso. También le aconsejaba emitir edictos presidenciales que pudieran utilizarse para burlar la supervisión del legislativo. A comienzos de la década de los ochenta, la administración Reagan se había implicado a fondo en apoyar y potenciar a la insurgencia derechista contra el Gobierno izquierdista de los sandinistas en la centroamericana Nicaragua. El elemento central de aquella campaña estaba constituido por el respaldo prestado de forma encubierta por Estados Unidos a los escuadrones de la muerte de la derechista Contra nicaragüense. Reagan también había autorizado el minado de los puertos de Nicaragua, lo que valió a Estados Unidos un fallo condenatorio del Tribunal Internacional de Justicia por uso ilegal de la fuerza.⁴¹

Cuando el Congreso estadounidense decidió finalmente en 1984 prohibir cualquier ayuda del Gobierno a la Contra mediante la aprobación de la Enmienda Boland,⁴² algunos miembros de la Casa Blanca de Reagan, encabezados por el coronel Oliver North, que trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional, pusieron en marcha un plan secreto para canalizar fondos hacia los rebeldes derechistas, contraviniendo directamente la ley estadounidense. Los fondos procedían de la venta ilícita de armamento al Gobierno iraní, lo que infringía el embargo en vigor que pesaba sobre cualquier tipo de transacción armamentística con aquel país. Catorce de esos miembros de la administración Reagan (incluido su secretario de Defensa) serían posteriormente condenados por su implicación en aquella trama.⁴³ Cuando se desveló el escándalo Irán-Contra y el Congreso decidió emplearse a fondo investigando sus orígenes, Cheney se destacó como el principal valedor de la Casa Blanca en el Capitolio y emitió una opinión discrepante en defensa de aquel programa estadounidense secreto que la mayoría de sus colegas congresistas habían juzgado ilegal. El «informe de la minoría» —en el que Cheney defendía a la Casa Blanca— tachaba de «histórica» la investigación del Irán-Contra llevada a cabo por el Congreso.⁴⁴ En aquel informe, cargaba contra la mayoría de los legisladores diciendo que la historia dejaba «muy poco lugar a dudas de que es del presidente de quien se ha esperado siempre que tenga el papel principal en el desarrollo de la política exterior de Estados Unidos», y concluía por ello que «las medidas del Congreso dirigidas a limitar el margen de actuación del presidente en ese ámbito deberían revisarse desde una posi-

ción de considerable escepticismo. Si interfieren con las funciones presidenciales centrales en materia de política exterior, deberían derogarse».

El presidente George H. W. Bush indultó posteriormente a los aliados de Cheney condenados en relación con el Irán-Contra. El propio Cheney terminaría siendo secretario de Defensa del ex vicepresidente durante la guerra del Golfo de 1991, cargo desde el que continuó forjando su proyecto de un poder ejecutivo con competencias inigualables en política exterior. Durante su mandato al frente del Departamento de Defensa, Cheney comenzó a sembrar las semillas de otro programa que ayudaría a la consolidación de esa supremacía del poder ejecutivo: encargó a Halliburton, gigante de los servicios de la industria del petróleo, un estudio en el que se exponía un amplio plan de privatización de la máxima cuota posible de la burocracia militar.⁴⁵ Cheney se dio cuenta desde muy pronto de que, empleando a compañías privadas para librar las guerras de Estados Unidos, se crearía una barrera adicional a la supervisión legislativa y judicial, lo que permitiría un mayor secretismo en la planificación y la ejecución de dichas guerras (tanto de las declaradas como de las que no lo estuvieran). Cheney pasaría poco después a presidir Halliburton, puesto en el que permanecería durante la mayor parte de la década de los noventa y desde donde encabezaría una ofensiva para crear un ejército privado en la sombra que, años después, a su regreso a la Casa Blanca a partir de 2001, serviría de eje fundamental de sus guerras (encubiertas o declaradas). Durante la era Clinton, Cheney también estuvo algún tiempo en el neoconservador American Enterprise Institute, donde desarrolló una agenda programática tanto política como militar lista para ser puesta en práctica en cuanto su partido recuperara el poder.⁴⁶ Desde el momento en que George W. Bush fue investido presidente, Cheney pasó a convertirse en el vicepresidente más poderoso de la historia del país. Y no desperdició tiempo en pugnar por expandir aún más ese poder.

El 10 de septiembre de 2001, un día antes de que el vuelo 77 de American Airlines —un Boeing 757— se estrellara contra el muro oeste del Pentágono, Donald Rumsfeld compareció en ese mismo edificio para pronunciar uno de sus primeros grandes discursos como secretario de Defensa. Dos retratos de Rumsfeld colgaban de las paredes interiores de aquellas dependencias: uno de la época en la que fue el secretario de Defensa más joven de la historia estadounidense, y el otro de esta otra nueva época (iniciada ese mismo año) como persona de mayor edad en haber desempeñado nunca ese mismo cargo.⁴⁷ Aún quedaban unas horas

para el 11-S, pero Rumsfeld estaba ya en el estrado ese día para lanzar una declaración de guerra.

«El tema de hoy es un adversario que supone una amenaza, una grave amenaza, para la seguridad de los Estados Unidos de América —bramó Rumsfeld—. Este adversario es uno de los últimos bastiones de la economía de planificación central que aún quedan en el mundo. Gobierna mediante la promulgación de planes quinquenales. Desde una única capital, trata de imponer sus exigencias a lo largo y ancho de varios husos horarios, continentes, océanos y más allá. Con una sistematicidad brutal, ahoga el libre pensamiento y aplasta las ideas nuevas. Es una fuente de problemas para la defensa de Estados Unidos y pone en riesgo la vida de nuestros hombres y mujeres de uniforme.»⁴⁸ Rumsfeld —todo un veterano de la Guerra Fría— prosiguió ante los que eran sus nuevos subordinados: «Quizás este adversario nos recuerde mucho a la antigua Unión Soviética, pero aquella era un enemigo que ya ha desaparecido: nuestro antagonista de hogaño es más sutil e implacable. Tal vez piensen que estoy describiendo a alguno de los últimos dictadores decrépitos que quedan en el mundo, pero también su tiempo ha pasado ya prácticamente y en ningún caso pueden equipararse en fuerza y magnitud a las de este otro adversario. El contrincante del que les hablo es mucho más cercano a nosotros. Me refiero a la burocracia del Pentágono». Lo que estaba en juego, declaró, era muy serio, «una cuestión de vida o muerte, en último término, para todos los americanos». Rumsfeld explicó a su público de aquel día, formado por ex ejecutivos de la industria de la defensa convertidos recientemente en burócratas del Pentágono, que tenía la intención de hacer más eficiente la manera en que Estados Unidos libraba sus guerras. «Habrá quien se pregunte que cómo se atreve el mismísimo secretario de Defensa a atacar al Pentágono ante su propia gente —dijo Rumsfeld a su auditorio—. A esas personas les respondo que no tengo deseo alguno de atacar al Pentágono; lo que quiero es liberarlo. Tenemos que salvarlo de sí mismo.» Aquel nuevo enfoque sería bautizado por Rumsfeld y su equipo como su particular «revolución de los asuntos militares».⁴⁹

El equipo de estrellas que Bush había formado para que se encargara de su política exterior llegó al poder con un programa dirigido a reorganizar radicalmente las fuerzas armadas estadounidenses, a poner fin a lo que ellos entendían que había sido el debilitamiento de las defensas nacionales durante la era Clinton y a reactivar el despliegue de sistemas colosales de defensa antimisiles que ya habían apoyado Reagan y otros halcones de la Guerra Fría.⁵⁰ Douglas Feith, adjunto de Rumsfeld en aquel entonces, recordaría tiempo después que «la amenaza del terrorismo yihadista esta-

ba en la lista de preocupaciones del Gobierno de Estados Unidos al comienzo de la administración Bush, a principios de 2001, pero recibía menos atención que Rusia».⁵¹ El foco central de la preocupación por el «terrorismo» de aquellos primeros meses de la administración de Bush hijo se dirigía sobre todo hacia las amenazas planteadas por determinados Estados-nación (Irán, Siria, Corea del Norte e Irak) y hacia la posibilidad de propiciar en ellos un cambio de régimen. Cheney y Rumsfeld habían dedicado buena parte de la década de los noventa a trazar una ruta para recomponer los mapas de Oriente Próximo y Medio, pero aquella proyección no estaba en absoluto centrada en la amenaza asimétrica que planteaban al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. Irak (y no al-Qaeda) era su obsesión. «Desde el primer momento, nos dedicamos a reunir y exponer razones para justificar el derrocamiento de Husein y a estudiar cómo echarlo del poder para transformar Irak en un país nuevo —dijo en una ocasión el ex secretario del Tesoro Paul O'Neill—. Y sabíamos que si conseguíamos expulsarlo de allí, habríamos dado con la solución integral del problema. De lo que se trataba, pues, era de hallar el modo de hacerlo. Eso era lo que marcaba el tono de nuestros trabajos por entonces. El presidente nos decía: “Perfecto. Busquen cómo conseguirlo”.»⁵² En la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la nueva administración presidencial, la celebrada el 1 de febrero de 2001, Rumsfeld se expresó sin rodeos: «En lo que queremos pensar de verdad es en cómo ir a por Sadam».

Lo irónico del caso —teniendo en cuenta las bravatas de Rumsfeld a propósito de la debilidad mostrada durante la era Clinton, y las acusaciones de los neoconservadores contra los demócratas a quienes recriminaban haber bajado la guardia ante al-Qaeda— es que, al principio, el propio Rumsfeld restaba importancia a la inminencia de la amenaza representada por la organización terrorista antes del 11-S. El periodista Bob Woodward relató los detalles de una reunión supuestamente celebrada el 10 de julio de 2001, dos meses antes de los atentados del 11 de septiembre. El director de la CIA, George J. Tenet, se reunió con Cofer Black, jefe del Centro de Antiterrorismo de la CIA (el CTC), en Langley (Virginia). Ambos hombres repasaron la información de inteligencia disponible sobre Bin Laden y al-Qaeda. Black, según Woodward, «expuso su argumento al respecto, basándose en diversas comunicaciones interceptadas y en otros datos de inteligencia de alto secreto que mostraban la probabilidad creciente de que al-Qaeda atentara en breve en territorio estadounidense. Sus pruebas eran un amasijo de fragmentos y puntos sin conectar que, pese a todo, parecían apoyar seriamente esa conjetura, tan seriamen-

te que Tenet decidió que Black y él debían acudir a la Casa Blanca de inmediato». ⁵³ En aquel entonces, «Tenet llevaba algún tiempo teniendo dificultades para conseguir que se emprendiera un plan de acción inmediata a propósito de Bin Laden, en parte, porque el secretario de Defensa, Donald H. Rumsfeld, había cuestionado todos los datos de grabaciones de conversaciones obtenidos por la Agencia de Seguridad Nacional y por otras fuentes de inteligencia que le habían presentado al respecto. ¿Acaso todo aquello no podía tratarse de un engaño a gran escala?, se había preguntado Rumsfeld. Tal vez fuera simplemente un plan destinado a medir las reacciones y las defensas estadounidenses». Tras revisar la información de inteligencia con Black, Tenet llamó a la consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, desde su coche, camino de la Casa Blanca. Cuando Black y Tenet se reunieron con Rice ese mismo día, según Woodward, tuvieron «la sensación de que no estaban convenciendo a la consejera. Ella se mostró amable con ellos, pero tuvieron la impresión de que les estaba dando calabazas». Black diría más tarde que «lo intentamos todo, menos apretar el gatillo de la pistola con la que le estábamos apuntando a la cabeza».

Poco después, los aviones pilotados por los secuestradores del 11-S se estrellaban contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Rumsfeld y su equipo no tardaron mucho tiempo en comprender que la lucha contra el terrorismo no tenía por qué perjudicar sus planes a propósito de Irak, sino que, de hecho, podía servir de justificación para ponerlos en marcha. Pero lo que quizá fue más importante entonces es que aquellos momentos posteriores al 11 de septiembre permitieron que Rumsfeld, Cheney y sus adláteres hicieran realidad sus tan ansiadas aspiraciones de un poder ejecutivo omnipotente que gozara del derecho virtualmente ilimitado de librar guerras allende cualquier frontera, un derecho para el que ellos hallaban justificación en una hipotética amenaza global a la seguridad nacional. Los objetivos y los planes de los que tanto habían hablado sin alzar mucho la voz en diversos encuentros no oficiales no tardarían en convertirse en la política oficial de Estados Unidos.

Desde el momento en que el comité de guerra del presidente Bush comenzó a planificar una respuesta a los atentados del 11-S, Rumsfeld encabezó la ofensiva dirigida a incluir a Irak en la lista de objetivos inmediatos. De cara a las reuniones que Bush convocó para el fin de semana del 15 y el 16 de septiembre de 2001 en Camp David, Feith preparó un memorando para Rumsfeld en el que se enumeraban «los blancos prioritarios inmediatos de una acción inicial»: al-Qaeda, los talibanes e Irak. ⁵⁴ «Las prioridades estaban muy claras desde la misma noche del 11-S», me

explicó el general Hugh Shelton, presidente en aquel entonces de la Junta de Jefes de Estado Mayor y asesor militar de mayor rango del presidente Bush.⁵⁵ Según me comentó, Rumsfeld y Wolfowitz empezaron a presionar de inmediato para que se organizara un ataque contra Irak. «Tenemos que invadir Irak. Tenemos que hacerlo ya —recordaba que dijeron—. Y eso a pesar de que no existía la más mínima prueba que indicara que [el 11-S] tenía vinculación alguna con Irak. Pero, aun así, el ruido de tambores comenzó aquella misma noche. No les gustó que entre los planes [de respuesta al 11-S] con los que me presenté en el despacho en aquel momento no hubiera ninguno que contemplara los planes que ellos manejaban para Irak.» Richard Clarke declaró por su parte que, el 12 de septiembre, el presidente Bush le ordenó tres veces que buscara hasta «el más mínimo indicio» que conectara a Irak con los atentados.⁵⁶ Wolfowitz envió un memorando estratégico a Rumsfeld en el que argumentaba que «bastaría con un 10 % de probabilidades de que Saddam Husein estuviera detrás del ataque del 11-S» para que «la eliminación de esa amenaza debiera convertirse en la máxima prioridad».⁵⁷ Junto a Shelton en el bando de las opiniones contrarias a la invasión de Irak, estaba uno de sus antecesores en el cargo, el general Colin Powell, a la sazón secretario de Estado. Una década antes, durante la guerra del Golfo, Powell ya había chocado frontalmente con Wolfowitz (en aquel entonces, subsecretario de Defensa) y con las ideologizadas autoridades civiles del Pentágono por el deseo que estas tenían de que las tropas estadounidenses llegaran hasta Bagdad para derrocar a Saddam.⁵⁸ Pero Powell y otros conservadores tradicionales, como el ex secretario de Estado James Baker y Brent Scowcroft, se impusieron en aquel debate. Diez años después, sin embargo, con los atentados del 11-S muy presentes en la mente de todo el mundo, Wolfowitz y los ideólogos estaban convencidos de que podrían alcanzar sus objetivos.

Según Shelton, en Camp David, Wolfowitz continuó presionando para que se ordenara un ataque contra Irak, a pesar de que el propio Shelton, Powell y figuras destacadas de las agencias de inteligencia insistían una y otra vez en que no había prueba alguna que indicara que Irak tuviese algo que ver con los atentados. Cuando los debates se centraron en Afganistán y en cómo atacar los refugios de al-Qaeda en aquel país, «como cabía esperar, Wolfowitz sacó el tema a colación: “Tenemos que utilizar esto como un motivo para atacar a Irak”», recordaba Shelton. El doctor Emile Nakhleh, analista de alto nivel de la CIA en aquel entonces, también se había dedicado a informar al presidente durante el periodo inmediatamente posterior al 11-S. Nakhleh llevaba una década en la Agencia, durante buena parte de la cual se había movido por diversos países musul-

manes de todo el mundo bajo la excusa oficial del desempeño de su actividad académica. Tras haber puesto en marcha el Programa de Análisis Estratégico del Islam Político de la CIA, del que había sido académico residente y especializado en movimientos islamistas radicales y en Gobiernos de Oriente Próximo y Medio, Nakhleh era el equivalente en la Agencia de un general de tres estrellas en el ejército estadounidense. Según me explicó él mismo, ante las presiones de Rumsfeld y Wolfowitz en aquellas primeras reuniones, y ante la insistencia de estos en que se incluyera una invasión de Irak entre las primeras reacciones a los atentados, Nakhleh se levantó y les dijo: «Si quieren ir a por ese hijo de perra [Sadam] para arreglar todas sus cuentas pendientes con él, adelante, pero nosotros no tenemos información alguna de que Sadam estuviera vinculado con al-Qaeda o con el terrorismo, y tampoco disponemos de información mínimamente clara» sobre la cuestión de las armas de destrucción masiva (ADM).⁵⁹ Nakhleh comentó que, tras aquellas primeras reuniones posteriores al 11-S, su «conclusión y la de otros analistas fue que iban a ir a la guerra. Aquel tren había salido ya de la estación y daba igual la información de inteligencia que nosotros presentáramos». El presidente Bush apartó el debate sobre Irak durante un tiempo, pues en su campaña electoral se había comprometido a no intervenir en operaciones de «construcción nacional». Entre otras cosas, había dicho que quería una política exterior «humilde». ⁶⁰ Pero sus opiniones al respecto evolucionaron con rapidez.

Llevó algún tiempo —y más de una docena de visitas a la CIA de Cheney y de su jefe de gabinete, «Scooter» Libby—⁶¹ acumular suficientes «pruebas» de la existencia de un programa iraquí activo de ADM para que los halcones *neocon* se salieran con la suya y pusieran en marcha sus planes de invasión de Irak. Pero, entretanto, se pusieron manos a la obra con su particular guerra contra la supervisión externa y la rendición de cuentas exigidas hasta entonces al ejecutivo federal. Al principio, la campaña de la CIA y las fuerzas especiales en Afganistán fue un paseo triunfal. Y, mientras la guerra en Afganistán daba pie a espectaculares titulares de prensa ensalzando la rapidez y la contundencia de la campaña militar estadounidense contra el débil Gobierno talibán, Cheney, Rumsfeld y sus seguidores neoconservadores andaban ocupados tramando una guerra global, una guerra que terminaría extendiéndose también al frente nacional interno de EE.UU., con escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, detenciones en masa de árabes, paquistaníes y otros inmigrantes musulmanes, y una ingente reducción de los derechos civiles de los propios ciudadanos estadounidenses.⁶² Para librarla, tendrían que desmantelar y manipular la maquinaria administrativa dedicada a la supervisión y

a la revisión judicial y legal que se había ido configurando a lo largo de sucesivas administraciones presidenciales previas. Todo esto abriría las puertas a un conjunto de prácticas que ya se habían usado con anterioridad, pero que, a partir de ese momento, pudieron desplegarse a una escala sin precedentes: acciones encubiertas, operaciones «negras», prisiones secretas, «secuestros» de prisioneros y la aceptación más o menos velada del asesinato como táctica bajo la etiqueta de la eliminación de «objetivos de alto valor».

Con el precedente aún cercano de la era Reagan-Bush, durante la que la institución de las operaciones encubiertas había quedado seriamente tocada por el escándalo Irán-Contra, el presidente Clinton implantó durante su primer mandato más mecanismos de supervisión y creó un riguroso sistema legal para la aprobación de acciones encubiertas «letales». Cuando Clinton o su consejero de seguridad nacional proponían una operación encubierta de esa clase, esta tenía que superar un sistema de supervisión interna.⁶³ En primer lugar, se remitía a la CIA, donde el jefe de los servicios jurídicos de la Agencia estudiaba su legalidad antes de trasladarla (posiblemente, junto con alguna que otra propuesta de cambio, resultado de ese estudio de legalidad) para una revisión adicional a dos comités distintos dentro de la propia CIA: el Grupo de Planificación de Acciones Encubiertas y el Grupo Examinador de Acciones Encubiertas. Cuando ambos comités habían revisado la propuesta de actuación y habían sugerido modificaciones en la misma, esta regresaba a la mesa del jefe de los servicios jurídicos de la Agencia para que procediera a su estudio de legalidad definitivo y, seguidamente, remitiera los resultados al presidente o al Consejo de Seguridad Nacional. Una vez de vuelta en la Casa Blanca, la propuesta era sometida a la evaluación del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Acciones Encubiertas, formado por representantes de diversos organismos y agencias del poder ejecutivo. Este grupo analizaba las consecuencias potenciales de la acción propuesta y la sometían a un nuevo estudio de legalidad. Tras un examen final a cargo de los máximos responsables (y de sus adjuntos) de las agencias y organismos pertinentes, la acción era presentada ya definitivamente al presidente para que este diera su aprobación. Rara era la vez en que llegaba a aprobarse una operación de este tipo.

Cuando el presidente Bush juró el cargo a comienzos de 2001, su administración dio a entender que pretendía conservar muchos de esos mismos controles y contrapesos. El sistema previsto en la Directiva Presidencial sobre Seguridad Nacional n.º 1 (NSPD-1), firmada por Bush el 13 de febrero de 2001, seguía muy de cerca el vigente durante la era Clinton para

la aprobación de acciones encubiertas.⁶⁴ Pero en marzo, Bush pidió a su consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, que solicitara de la CIA «el diseño de una nueva serie de autorizaciones de acciones encubiertas en Afganistán».⁶⁵ Clarke y sus homólogos de la CIA, encargados del funcionamiento de la llamada «Unidad Bin Laden», comenzaron a planificar acciones encubiertas con al-Qaeda como objetivo, mientras la administración estadounidense proponía aumentar los fondos destinados a antiterrorismo en la CIA. Clarke presionó a fondo para que la Casa Blanca ordenara un ataque de represalia contra al-Qaeda por el atentado con explosivos de octubre de 2000 contra el destructor USS *Cole* en las costas de Yemen.⁶⁶ Como ya era costumbre en tiempos de Clinton, muchos de los planes que se elaboraron por entonces contemplaban atacar a líderes de al-Qaeda afincados en Afganistán. A finales de mayo, Rice y Tenet se reunieron con Clarke, Cofer Black y el jefe de la Unidad Bin Laden para discutir la posibilidad de «pasar a la ofensiva» contra al-Qaeda.⁶⁷ La CIA estaba llevando a cabo en aquel entonces labores de interferencia en la capacidad operativa de Bin Laden, pero las autoridades allí reunidas estuvieron de acuerdo en que lo que necesitaban era un plan para «doblegar» a al-Qaeda. También coincidieron en la necesidad de prestar ayuda encubierta a Uzbekistán, aunque se abstuvieron de ofrecer apoyo significativo a la Alianza del Norte y a otros grupos antitalibanes del interior de Afganistán.⁶⁸ Por así decirlo, optaron por dar continuidad al enfoque ya adoptado durante la era Clinton con respecto a al-Qaeda y Afganistán, aunque incrementando el presupuesto y el ámbito geográfico de actuación.

En junio se difundió un proyecto de nueva Directiva Presidencial sobre Seguridad Nacional (NSPD) en materia de antiterrorismo. El consejero adjunto de seguridad nacional, Stephen Hadley, describiría posteriormente aquel programa ante la Comisión de Investigación del 11-S como «decididamente ambicioso», pues en él se proponía una iniciativa de varios años en la que intervenían «todos los instrumentos del poder nacional» y que incluía un ambicioso programa de acciones encubiertas.⁶⁹ Pero el proyecto aún tendría que superar otras cinco reuniones entre directivos adjuntos de esas agencias y organismos antes de que se sometiera a la valoración final de los máximos responsables de las mismas.⁷⁰ En una de esas reuniones, celebrada en agosto de 2001, el Comité de Directivos Adjuntos del CSN había llegado a la «conclusión de que es legal que la CIA mate a Bin Laden o a uno de sus segundos» con un ataque con un *drone* (avión no tripulado) Predator.⁷¹

Aunque el uso de *drones* terminaría por convertirse en una de las señas características de la maquinaria estadounidense de asesinatos selec-

tivos, con anterioridad al 11-S había grandes discrepancias sobre la cuestión en las filas del equipo de responsables y asesores de antiterrorismo de Bush. Durante el año final de la administración Clinton, Estados Unidos había empezado a realizar vuelos con aviones no tripulados sobre territorio de Afganistán⁷² que despegaban desde una base estadounidense secreta, llamada K₂, en Uzbekistán.⁷³ También se había puesto en marcha un programa para la creación de un *drone* equipado como arma y utilizable como tal, pero el prototipo no estaba aún operativo.⁷⁴ Cofer Black sostenía incluso que los *drones* no debían ser usados siquiera para labores de reconocimiento, con lo que daba a entender que la administración debería esperar hasta que fueran desplegables como elemento armamentístico.⁷⁵ Señalaba como justificación que el Gobierno talibán había detectado un Predator sobre territorio afgano en 2000 y que lo único que había conseguido Estados Unidos con ello era que Kabul ordenara el despegue de cazas MiG para interceptarlo. «No creo que el posible valor de reconocimiento de esos aparatos sea superior al riesgo de una posible finalización forzada del programa como la que se produciría si los talibanes exhibieran un Predator carbonizado ante las cámaras de la CNN», afirmó Black al respecto.⁷⁶ Al final, la administración decidió aparcarse el uso de *drones* para misiones de reconocimiento en Afganistán hasta que pudieran ser cargados con armamento para ser utilizados en operaciones de ataque.⁷⁷ Pero mientras Black, Clarke y otras figuras del equipo de asesores en antiterrorismo del presidente insistían con denuedo en el aprovechamiento posterior de los Predator para la realización de operaciones de asesinato selectivo, los máximos dirigentes de la CIA se mostraban seriamente preocupados ante la posibilidad de que la Agencia fuese la encargada finalmente de poner en práctica ese programa, una preocupación que recordaba en gran medida a la que sentían los asesores en antiterrorismo de Clinton ante el riesgo de crear listas estadounidenses de potenciales objetivos humanos. Según la Comisión del 11-S, Tenet «en particular cuestionó si él, como director de la Agencia Central de Inteligencia, debía ser quien se encargara de organizar una operación con un Predator armado. “Ese era un territorio nuevo”, nos dijo. Tenet apuntó diversas preguntas clave al respecto: ¿cuál es la cadena de mando?, ¿quién dispara?, ¿van a sentirse cómodos los dirigentes estadounidenses con que la CIA haga algo así, saliéndose de los cauces normales de mando y control militar?».⁷⁸ Charles Allen, director adjunto de recopilación de datos de inteligencia de la CIA entre 1998 y 2005,⁷⁹ dijo que él y el número tres de la Agencia, A. B. «Buzzy» Krongard, «habían asegurado en su momento que cualquiera de ellos estaría encantado de apretar el gatillo, pero que

Tenet estaba horrorizado», y añadió que ningún miembro del personal de la CIA contaba con suficiente autoridad para utilizar *drones* para la ejecución sumaria de personas, aunque se tratara de terroristas.⁸⁰

Estos debates se desarrollaban en el seno mismo de la Agencia y no fue hasta una semana antes del 11-S cuando la administración Bush convocó un encuentro de «directivos principales» de organismos y agencias para analizar y comentar la amenaza de al-Qaeda. En esa reunión del 4 de septiembre, se presentó oficialmente el proyecto de la nueva Directiva Presidencial sobre Seguridad Nacional, que fue aprobado «sin apenas discusión» y remitido a Bush para que lo firmara.⁸¹ Al parecer, la consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, explicó entonces al presidente Bush que, a su juicio, se tardarían unos tres años en implementar tan ambicioso programa.⁸² El 10 de septiembre, Hadley continuó presionando al director Tenet y a la CIA para que elaborara un proyecto de atribución de competencias legales «para el desempeño del “amplio programa de acciones encubiertas” previsto en el proyecto de directiva presidencial».⁸³ Hadley también le dio instrucciones para que redactara unas conclusiones para dicha directiva en las que «se autorizara una amplia variedad de otras actividades encubiertas, que incluían los apresamientos extrajudiciales o el uso de la fuerza letal [contra] los elementos de mando y control» de al-Qaeda. Según el informe final de la Comisión del 11-S, ese apartado final anularía varios de los documentos aprobados durante la era Clinton y debería ser suficientemente amplio como para «dar cobertura a cualquier operación adicional que pudiera contemplarse en relación» con Osama bin Laden. Aunque la administración Bush trabajaba en la ampliación del ámbito de aplicación de la fuerza letal aceptable contra Bin Laden y sus principales lugartenientes, el proceso había estado marcado por las mismas preocupaciones expresadas durante la era Clinton con respecto a la concesión de una capacidad legal demasiado amplia de aplicación de esa fuerza letal. La Casa Blanca de Bush estaba tomando inicialmente, pues, una vía muy similar a la de la administración Clinton, consistente, por un lado, en tratar de soslayar la prohibición del asesinato como método aplicable por el Gobierno de Estados Unidos y, por otro, en seguir requiriendo una cuidadosa revisión y estudio de cualquier propuesta de operación letal de ese tipo.

Todo eso cambiaría el 11 de septiembre.

Con el derrumbe de las torres del World Trade Center, también se desplomó el sistema de supervisión y examen de las operaciones letales encubiertas que tan minuciosamente se había ido construyendo en el transcurso de la década anterior.